

**S E S I Ó N   P Ú B L I C A   NÚM. 8**  
**O R D I N A R I A**  
**LUNES 20 DE ENERO DE 2014**

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con cuarenta minutos del lunes veinte de enero de dos mil catorce, se reunieron en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para celebrar sesión pública ordinaria, los señores Ministros Presidente Juan N. Silva Meza, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alberto Pérez Dayán.

A continuación, el señor Ministro Presidente Silva Meza abrió la sesión y el secretario general de acuerdos dio cuenta de lo siguiente:

**I. APROBACIÓN DE ACTA**

Se sometió a consideración el proyecto de acta de la sesión pública número siete ordinaria, celebrada el jueves dieciséis de enero de dos mil catorce.

Por unanimidad de once votos el Tribunal Pleno aprobó dicho proyecto.

**II. VISTA Y RESOLUCIÓN DE ASUNTOS**

Asuntos de la Lista Oficial para la Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el lunes veinte de enero de dos mil catorce:

**I. 65/2012**

Acción de inconstitucionalidad 65/2012, promovida por diversos Diputados integrantes de la Sexagésima Legislatura del Estado de Jalisco en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la mencionada entidad, demandando la invalidez del Decreto 24158/LIX/12, en la porción que derogó la fracción XI del artículo 9 de la Ley del Notariado del Estado de Jalisco, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad de trece de noviembre de dos mil doce. En el proyecto formulado por el señor Ministro Alberto Pérez Dayán se propuso: *“PRIMERO. Es procedente y fundada parcialmente la presente acción de inconstitucionalidad promovida por un grupo de Diputados integrantes de la Sexagésima Legislatura del Estado de Jalisco. SEGUNDO. Se declara la invalidez del decreto 24158/LIX/12, publicado en el periódico oficial del Estado de Jalisco el trece de noviembre de dos mil doce, en la porción que deroga la fracción XI del artículo 9 de la Ley del Notariado del Estado de Jalisco. TERCERO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.”*

El señor Ministro ponente Pérez Dayán, respecto del dictamen que le hizo llegar el señor Ministro Aguilar Morales, indicó coincidir con los aspectos que demuestran la incertidumbre que genera el propio expediente en cuanto a que no se advierte que los diputados hayan discutido o tenido conocimiento previo de la minuta a través de la cual,

siguiendo las observaciones del Ejecutivo, se derogó una disposición diversa a la planteada.

Agradeció el memorándum que le remitió el señor Ministro Valls Hernández, en el cual le solicitó destacar la fuerza invalidatoria que puede tener la falta de reglas en el procedimiento y el cumplimiento a dichas reglas, particularmente del hecho de que el resultado final de este dictamen final partiera de la derogación de un artículo cuya discusión nunca se dio.

Aclaró que la síntesis que se leyó durante la sesión que aprobó el dictamen correspondiente, únicamente describió el rubro de la minuta, no así la proposición de derogación de una de las fracciones. Señaló que modificaría el proyecto agregando lo anterior.

En relación con la participación de la señora Ministra Luna Ramos, precisó que no solamente no se incluyó la derogación de mérito sin intermediar iniciativa, sino que la falta de presentación de esa moción por los presentes durante la sesión afectaría a los legisladores promoventes de esta acción, dado que no eran integrantes entonces del cuerpo legislativo.

El señor Ministro Valls Hernández se manifestó de acuerdo con la consulta porque las violaciones en el procedimiento legislativo trascienden de manera fundamental a su validez, ya que la Comisión Dictaminadora

incluyó un precepto no contemplado en alguna etapa previa y, por ende, no fue objeto de valoración.

Sugirió realizar unos matices en el sentido de que no existe constancia que permita determinar que lo aprobado por la Legislatura del Estado de Jalisco fue objeto de conocimiento previo y que, al aprobarse el dictamen respecto de las observaciones del Ejecutivo del Estado, no hubo debate, pues por un lado, a pesar de no constar en autos documento alguno que de manera indubitable demuestre que el dictamen elaborado por la Comisión fue entregado previamente a los diputados, no obstante eso, en el acta y diario de debates relativo a la sesión de veinticinco de octubre de dos mil doce consta que previamente se les dio copia del mismo, sin que tal aspecto hubiese sido objetado; y, por otro lado, la no justificación de la incorporación de la fracción XI del artículo 9 de la Ley del Notariado de Jalisco no autoriza concluir que por ello ninguno de los diputados presentes intervino en su discusión. Por ello, debe enfatizarse que la inobservancia de los cauces del procedimiento legislativo no otorga la certeza de que, aun con la aprobación del decreto relativo por treinta y cuatro diputados, haya sido realmente voluntad del Congreso derogar dicha fracción al no haberse expuesto razón alguna para ello, lo que trastoca los atributos democráticos de la decisión final al no contar con elementos para pronunciarse al respecto.

El señor Ministro Aguilar Morales, a pesar de coincidir con la invalidez propuesta por el proyecto, consideró que el argumento invalidatorio del asunto no radica en la falta de justificación de la derogación de la disposición de cuenta, sino que no existe constancia de que se les haya entregado a los diputados el dictamen, lo cual, a pesar de no haber sido impugnado, implica una violación al procedimiento legislativo al no otorgar la debida oportunidad a los legisladores de ser informados, además de que en el recorte de plazos tampoco se menciona la derogación de dicha disposición, sino de la reforma del artículo 28 de la Ley del Notariado.

El señor Ministro Franco González Salas se mostró de acuerdo con el sentido del proyecto. Señaló que lo planteado por el señor Ministro Aguilar Morales no es excluyente de los otros problemas presentados en el proceso legislativo, a saber, la premura por la conclusión del período de la legislatura y demás condiciones que, en conjunto, constituyen violaciones invalidantes del proceso. Indicó que se sumaría a lo comentado por el señor Ministro Aguilar Morales agregando el relevo de formalidad en el conocimiento de una reforma consecuencia de observaciones del Ejecutivo, cuando el propio reglamento establece que el dictamen debe reducirse a éstas.

Estimó insuficientes las justificaciones para convalidar el hecho de que en el dictamen realizado a partir de las observaciones del Ejecutivo se introdujera una derogación sin hacer alusión alguna a ese punto que es muy importante

para la designación de notarios y que posteriormente no se diera a conocer a los diputados, poniéndose a votación en bloque con un conjunto de dictámenes, máxime que no existe constancia de que en la síntesis que se leyó se haya dado cuenta con este punto.

Por estas razones, encontró la necesidad de invalidar el proceso ante la falta de justificación del incumplimiento de los requisitos previstos por el reglamento para que los diputados y el Congreso estuvieran en posibilidades de discutir lo relativo.

La señora Ministra Luna Ramos recapituló que el proceso legislativo se inició por la reforma al artículo 28 y por adiciones al artículo 28 Bis de la Ley del Notariado y que el gobernador del Estado realizó observaciones, las cuales se turnan a la Comisión de Puntos Constitucionales y ésta agrega la derogación de la fracción XI del artículo 9 con el motivo de “perfeccionar la normatividad”. Aclaró que no existía iniciativa de esta derogación, señalando que puede darse la posibilidad de que se modifiquen otros artículos, siempre y cuando se determine la razón acerca de su necesidad.

Precisó que se hace una dispensa de las dos lecturas y supuestamente se leyó una síntesis, pero en el acta correspondiente aparece que está relacionada con las reformas al artículo 28 y no hubo mención expresa al artículo 9, además de que no existe constancia de que los diputados recibieron el dictamen con anticipación, la única constancia

que existe es relativa a la entrega a la Mesa Directiva un día antes, vulnerando el contenido de los artículos 16 y 26 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco y, por tanto, no hubo posibilidad de presentar una moción, pues no se tenía conocimiento del contenido del dictamen. Concluyó que se violaron los principios deliberativos y de debate que deben guardarse en los cuerpos colegiados en materia política, considerando como fundados los conceptos de invalidez relativos y, por ende, se mostró de acuerdo con la declaración de invalidez del decreto en cuestión.

El señor Ministro Pardo Rebolledo estimó que la demanda enfatiza la necesidad de una nueva iniciativa para poder analizar la derogación al artículo 9, fracción XI, de la Ley del Notariado, sin embargo, existe una serie de irregularidades en la aplicación del artículo 26 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, a saber, que se agregaron cuestiones distintas a las observaciones del gobernador y que no hay constancia fehaciente de que todos los diputados tuvieran conocimiento del dictamen que incorporó el nuevo aspecto de la derogación, además de que no se realizó la lectura correspondiente. Por esto, se manifestó conforme con el proyecto y por la incorporación de estos argumentos para fortalecer la decisión.

El señor Ministro Presidente Silva Meza coincidió esencialmente con la propuesta del proyecto, adhiriéndose a

lo indicado por los señores Ministros Luna Ramos y Franco González Salas, respecto del conjunto de excepciones y dispensas de la Comisión, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 26 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco y violentando los principios de seguridad jurídica, de deliberación parlamentaria y de división de poderes, razón suficiente para invalidar el decreto.

El señor Ministro ponente Pérez Dayán modificó el proyecto para agregar un matiz relativo a la participación del señor Ministro Valls Hernández, a saber, que no puede afirmarse concluyentemente que el dictamen fue objeto del conocimiento de los diputados.

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió a votación la propuesta modificada del proyecto, contenida en el considerando quinto relativo al estudio de fondo, la cual se aprobó en forma económica por unanimidad de once votos.

El secretario general de acuerdos dio lectura a los puntos decisorios, de la siguiente manera:

*“PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad promovida por un grupo de Diputados integrantes de la Sexagésima Legislatura del Estado de Jalisco. SEGUNDO. Se declara la invalidez del decreto 24158/LIX/12, publicado en el periódico oficial del Estado de Jalisco el trece de noviembre de dos mil doce, en la porción que deroga la fracción XI del artículo 9 de la Ley*

*del Notariado del Estado de Jalisco, la cual surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Jalisco. TERCERO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.”*

El señor Ministro Presidente Silva Meza declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.

El secretario general de acuerdos dio cuenta con el asunto siguiente:

## **II. 65/2012**

Controversia constitucional 13/2013, promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos, en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la mencionada entidad federativa, demandando la invalidez del Decreto 216 por el que se reforman y adicionan los artículos 5, 8, 21, 23, 43, 45 y 52 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos, publicado en el periódico oficial de esa entidad el veintiséis de diciembre de dos mil doce. En el proyecto formulado por el señor Ministro Alberto Pérez Dayán se propuso: *“PRIMERO. Es procedente y parcialmente fundada la presente controversia constitucional. SEGUNDO. Se declara la invalidez de la porción normativa del artículo 5, fracción III, de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos, reformado mediante el decreto número doscientos dieciséis publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintiséis de diciembre de dos mil doce, precisada en el último considerando de esta ejecutoria. TERCERO. Con la*

*salvedad anterior, se reconoce la validez de los artículos 5, 8, 21, 23, 43, 45 y 52 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos, reformado mediante el decreto número doscientos dieciséis, publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintiséis de diciembre de dos mil doce. CUARTO. Publíquese esta ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación y su Gaceta y en el Periódico Oficial del Estado de Morelos.”*

El señor Ministro ponente Pérez Dayán presentó el proyecto, precisando que se propone declarar procedente y parcialmente fundada la controversia constitucional al considerar que el artículo 5, fracción III, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, vigente a partir del primero de enero de dos mil trece, contraviene la autonomía e independencia del Poder Judicial del Estado al establecer que los jueces de primera instancia y menores del Tribunal Superior de Justicia de dicha entidad serán considerados como trabajadores de confianza, violentando también el principio de división de poderes.

Destacó que el treinta y uno de julio de dos mil trece se publicó en el periódico oficial del Estado el decreto por el que se reformaron los artículos 2 y 42 de la citada ley, sin embargo, esto no incide en los jueces de primera instancia y menores, ya que únicamente versa en que los magistrados numerarios y supernumerarios e integrantes del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia no quedan

comprendidos dentro del concepto de trabajadores de confianza.

Finalmente, propuso a consideración del Tribunal Pleno los aspectos procesales del proyecto.

El señor Ministro Franco González Salas señaló que, respecto de la oportunidad, habría que descontar el día cinco de febrero, dado que es inhábil conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo cual no afectaría en nada al resto del proyecto.

El señor Ministro ponente Pérez Dayán modificó el proyecto con la observación realizada.

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió a votación la propuesta del proyecto contenida en los considerandos primero, segundo y tercero relativos, respectivamente, a la competencia, a la legitimación activa y pasiva y a la oportunidad, la cual se aprobó en forma económica por unanimidad de once votos.

El señor Ministro ponente Pérez Dayán realizó la presentación del considerando cuarto del proyecto relativo a a las causas de improcedencia, aduciendo que se desestima la hecha valer por el Poder Ejecutivo en el sentido de que la demanda se presentó de manera extemporánea, dado que los trabajadores de los tres Poderes están incluidos en la Ley del Servicio Civil desde que entró en vigor, a saber, desde el nueve de septiembre de dos mil, debido a que no se reclama dicha inclusión, sino la distinción que se hace

con motivo de la reforma impugnada entre trabajadores de base y de confianza, excluyendo a estos últimos del derecho a la estabilidad en el empleo.

Asimismo, se desestima la causa de improcedencia hecha valer por los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado relativa a la falta de interés jurídico del Poder Judicial, toda vez que los argumentos relativos están estrechamente relacionados con los que esgrime la promovente para demostrar que la reforma impugnada transgrede los principios judiciales tutelados en la fracción III del artículo 116 constitucional.

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió a votación la propuesta del proyecto contenida en el considerando cuarto relativo a las causas de improcedencia, la cual se aprobó en forma económica por unanimidad de once votos.

El señor Ministro ponente Pérez Dayán presentó el considerando quinto del proyecto, relativo al estudio del primer concepto de invalidez. Propuso declarar parcialmente fundado el mismo con base en tres argumentos esenciales: primero, la estabilidad en el cargo como principio judicial para asegurar la independencia y autonomía de los Poderes Judiciales de los Estados sólo debe garantizarse a favor de los titulares de los órganos jurisdiccionales por ser a quienes se les exige ejercer su función sin subordinación de voluntad humana alguna, lo que no sucede con el resto de los servidores públicos, pues están subordinados a dichos

titulares; segundo, las disposiciones de la Constitución de del Estado de Morelos relativas al establecimiento de un período inicial del cargo de magistrado del Tribunal Superior de Justicia y su posibilidad de ratificación a la conclusión del mismo también son aplicables a los jueces de primera instancia y menores, aun cuando no se prevé expresamente; y, tercero, el artículo 5, fracción III, de la Ley del Servicio Civil, en cuanto establece que se considerarán trabajadores de confianza, entre otros, a los jueces de primera instancia y menores, resulta contrario al fin que persigue el principio judicial de estabilidad en el cargo, consistente en otorgar seguridad al juzgador de que no será removido de manera arbitraria durante su período de designación, pues conforme a lo previsto en los artículos 8, 23 y 46 de dicho ordenamiento, los trabajadores de confianza no tienen derecho a conservar el cargo y, por tanto, pueden ser removidos en cualquier tiempo aun cuando no hayan incurrido en una causa de responsabilidad o en un mal desempeño de su función, simplemente por la pérdida de confianza.

Precisó que no pasa inadvertido que también se incluyen como trabajadores de confianza al magistrado visitador general y a los jueces auxiliares del mismo, sin embargo, estos servidores públicos no gozan de la garantía judicial de estabilidad en el cargo, ya que el nombramiento relativo puede no recaer en los titulares de los órganos jurisdiccionales, máxime que no ejercen funciones de esta naturaleza. Además, de ser el caso, quien ejerciere tales

atribuciones dejaría el cargo conferido como funcionario del Consejo de la Judicatura local, pero no el que hubiere ostentado previamente como titular de un órgano jurisdiccional.

Por tanto, se propone declarar que el artículo 5, fracción III, de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos, en su porción normativa de “los jueces de primera instancia y menores”, contraviene la autonomía e independencia del Poder Judicial del Estado y, en consecuencia, el principio de división de poderes.

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió a votación la propuesta del proyecto contenida en el considerando quinto, relativo al estudio del primer concepto de invalidez, la cual se aprobó en forma económica por unanimidad de once votos.

El señor Ministro ponente Pérez Dayán presentó el considerando quinto del proyecto, relativo al estudio del segundo concepto de invalidez. Indicó que se propone declarar infundado el argumento relativo a que la estabilidad en el cargo constituye un derecho adquirido para los servidores públicos que ingresaron a laborar con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma impugnada y se viola el principio de irretroactividad consagrado en el artículo 14 constitucional en perjuicio del Poder Judicial del Estado, porque únicamente se pretende demostrar una eventual afectación a los derechos individuales de los servidores públicos y, por tanto, la circunstancia de que se consideren

como trabajadores de confianza a los secretarios, actuarios, notificadores, magistrado visitador general y jueces auxiliares de dicho magistrado, no puede estimarse como un problema de constitucionalidad susceptible de analizarse a través de la presente controversia, dado que su objeto es dirimir los conflictos suscitados entre los órganos del Estado por invasión de esferas competenciales.

La señora Ministra Luna Ramos se inclinó en favor del proyecto y manifestó una duda relativa a si el artículo 5 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos fue impugnado en su totalidad, puesto que en su fracción IV no impugnada están considerados también como personal de confianza a los jueces de paz, siendo que correrían con la misma suerte que los jueces de primera instancia y menores, dado que, si bien su sueldo y propuesta corre a cargo del municipio, el nombramiento lo realiza el Poder Judicial del Estado y sus requisitos son en función de sus funcionarios, situación que debería estudiarse en suplencia de la queja al encontrarse el supuesto en el mismo artículo declarado inconstitucional.

El señor Ministro ponente Pérez Dayán indicó que no tendría una respuesta inmediata al realizar un análisis bajo la figura de suplencia de la queja, pues no se impugnó el artículo 4, sino el 5, 8, 21, 23, 43, 45 y 52.

El señor Ministro Cossío Díaz precisó que el texto reclamado es el artículo 5 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos, en cuya fracción IV se menciona a los

jueces de paz, por tanto, está impugnado el precepto en su totalidad, aun cuando no menciona específicamente dicha fracción.

Estimó que, conforme al artículo 17 constitucional, no se debe analizar la adscripción o salario de un juez, sino su función jurisdiccional, por lo que tampoco importa su cuantía y, por ende, es pertinente hacer una declaración extensiva de invalidez a estos jueces al ser simplemente argumentativa, sin que se genere esta invalidez con preceptos nuevos ni a partir de otros artículos, máxime que se debe proteger la independencia y autonomía de los funcionarios judiciales.

El señor Ministro Franco González Salas se sumó a lo expuesto por los señores Ministros Luna Ramos y Cossío Díaz, dado que los jueces de paz cuentan con todas las características de juzgadores, a saber, están en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, son nombrados por el Consejo de la Judicatura estatal y realizan funciones eminentemente jurisdiccionales, pues conocen de juicios cuyo monto no exceda del importe de ciento cincuenta veces el salario mínimo, de la diligenciación de exhortos y despachos de los delitos sancionados únicamente con multa o pena alternativa, además de que son auxiliares de los tribunales de la Federación y del Estado, con atribuciones iguales a la de los jueces menores y, si bien tiene características especiales por su propia naturaleza, como son la temporalidad de su cargo y los requisitos para

ocuparlos, lo cierto es que no deben ser considerados como trabajadores de confianza.

La señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas se sumó a la propuesta de los señores Ministros Luna Ramos, Cossío Díaz y Franco González Salas, puesto que los jueces de paz no pueden ser considerados como trabajadores de confianza, ya que son titulares de los órganos jurisdiccionales.

Consideró que debería desarrollarse en el proyecto el aspecto de carrera judicial de los demás funcionarios señalados por el artículo 5, fracción III, de la norma combatida, porque realizan funciones de apoyo directo a los titulares de los órganos jurisdiccionales y, si bien no son propiamente titulares, valdría la pena realizar algunos pronunciamientos en el sentido de que tienen ciertas calidades y carrera judicial; de no atenderse estas precisiones, anunció que las plasmaría en un voto concurrente.

El señor Ministro Presidente Silva Meza estimó que los razonamientos vertidos por los señores Ministros que hicieron uso de la voz implícitamente quedan inmersos en el desarrollo del considerando, por ejemplo al contestar el primer concepto de invalidez, porque puede extenderse a la justicia de paz, como cuando analiza el artículo 14 constitucional, por ello, se debe incluir a los jueces de paz en el mismo principio y, por tanto, invalidar el precepto en esta porción.

El señor Ministro ponente Pérez Dayán consideró que no debería diferenciarse a los jueces de primera instancia y menores de los jueces de paz porque esencialmente desarrollan la misma labor y, por tanto, plasmará estos argumentos en el engrose respectivo; además, estimó los avances que se han logrado en materia de carrera judicial, la cual se basa en la permanencia; además, aun cuando la Constitución Federal, de los Estados y las leyes han reconocido la titularidad de los órganos jurisdiccionales exclusivamente a los magistrados otorgándoles inamovilidad, independencia y autonomía, los mismos atributos deben extenderse a los jueces de paz, pues es igual de importante su labor de juzgamiento.

El señor Ministro Valls Hernández coincidió con la incorporación de los jueces de paz en las prerrogativas analizadas, mas no respecto de los demás funcionarios porque no son titulares de una función jurisdiccional, sino auxiliares de los titulares. Con esta precisión, manifestó su conformidad con la propuesta.

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió a votación la propuesta modificada del considerando quinto, relativo al estudio del primer concepto de invalidez, la cual se aprobó en forma económica por unanimidad de once votos.

El señor Ministro ponente Pérez Dayán presentó el considerando sexto del proyecto relativo a los efectos de la sentencia, en el sentido de que se debe declarar la invalidez del artículo 5, fracciones III y IV, de la Ley del Servicio Social

para el Estado de Morelos, en las porciones normativas que prevén como trabajadores de confianza a los jueces de primera instancia y menores y los jueces de paz, respectivamente, misma que surtirá efectos a partir de esta fecha.

Respecto de las demás normas impugnadas que no resultan aplicables a estos funcionarios, debe reconocerse su validez.

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió a votación la propuesta modificada contenida en el considerando sexto relativo a los efectos de la sentencia, la cual se aprobó en forma económica por unanimidad de once votos, con la modificación propuesta por el señor Ministro Aguilar Morales consistente en que la respectiva declaración de invalidez surta sus efectos con motivo de la notificación de los puntos resolutivos de este fallo al Congreso del Estado de Morelos.

El secretario general de acuerdos dio lectura a los puntos resolutivos en los siguientes términos:

*“PRIMERO. Es procedente y parcialmente fundada la presente controversia constitucional. SEGUNDO. Se declara la invalidez de las porciones normativas del artículo 5, fracciones III y IV que indican, respectivamente, “Los Jueces de Primera Instancia y Menores” y “los Jueces de Paz”, de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos, reformado mediante el decreto número doscientos dieciséis publicado*

*en el Periódico Oficial del Estado el veintiséis de diciembre de dos mil doce, precisada en el último considerando de esta ejecutoria, la cual surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de este fallo al Congreso del Estado de Morelos. TERCERO. Con la salvedad anterior, se reconoce la validez de los artículos 5, 8, 21, 23, 43, 45 y 52 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos, reformado mediante el decreto número doscientos dieciséis, publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintiséis de diciembre de dos mil doce. CUARTO. Publíquese esta ejecutoria en el Diario Oficial de la Federación, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y en el Periódico Oficial del Estado de Morelos.”*

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió a votación la congruencia formal de los puntos resolutivos, la cual se aprobó en forma económica por unanimidad de once votos.

El señor Ministro Presidente Silva Meza declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.

El señor Ministro Presidente Silva Meza levantó la sesión a las doce horas con cincuenta minutos, previa convocatoria que emitió a los integrantes del Pleno para acudir a la próxima sesión pública ordinaria del día martes veintiuno de enero de dos mil catorce, a la hora de costumbre.

Firman esta acta el señor Ministro Presidente Juan N. Silva Meza y el licenciado Rafael Coello Cetina, secretario general de acuerdos, quien da fe.